

LEGAJO DE APELACIÓN FORMADO EN LA CAUSA N° CPE 1841/2013, CARATULADA: “CENTRO DE NUTRICION Y ESTETICA S.A. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769”. JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N° 10, SECRETARÍA N° 20. EXPEDIENTE N° CPE 1841/2013/12/CA6, ORDEN N° 29.664. SALA “B”.

Buenos Aires, de noviembre 2020.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de O.S.V. obrante en fotocopias a fs. 28/29 vta. del presente legajo contra los puntos dispositivos I, III y IV de la resolución que obra a fs. 13/26 vta. del mismo, en cuanto por aquéllos se dictó un auto de procesamiento, sin prisión preventiva, respecto de la nombrada, se trabó embargo sobre los bienes de aquélla y se impuso a O.S.V. la prohibición de salida del país y la obligación de no ausentarse de su domicilio real por más de veinticuatro (24) horas sin dar aviso previo al juzgado “*a quo*”.

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de M.L.C., de G.S.C. y de A.S.C., obrante en fotocopias a fs. 30/30 vta. del presente legajo, contra los puntos dispositivos I y IV de la resolución que obra a fs. 13/26 vta. del mismo, en cuanto por aquéllos se dispuso “...*REFORMULAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO...*” dictado oportunamente con relación a los nombrados, por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de evasión tributaria simple y agravada, e imponer a los nombrados la prohibición de salida del país.

Los memoriales de fs. 41/45 y 46/49 del presente expediente, por los cuales la defensa de O.S.V. y la defensa de M.L.C., de G.S.C. y de A.S.C. informaron por escrito en los términos del artículo 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1°) Que, por un pronunciamiento anterior, el señor juez a cargo del juzgado de la instancia previa ordenó el procesamiento, sin prisión preventiva, de M.L.C., de G.S.C. y de A.S.C., en orden a la comisión presunta del delito tipificado por el artículo 1° del Régimen Penal Tributario (ley 24.769, texto según ley 26.735), por la evasión presunta del pago del Impuesto al Valor

Agregado a cuyo pago la contribuyente CENTRO DE NUTRICION Y ESTÉTICA S.A. se habría encontrado obligada, correspondiente a los ejercicios anuales 2010, 2011 y 2012 (por las sumas de \$ 2.696.741,25, \$ 2.547.476,20 y \$ 1.945.579,51, respectivamente).

2º) Que, este Tribunal, con una conformación parcialmente diferente de la actual, dispuso confirmar el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de M.L.C., de G.S.C. y de A.S.C. al cual se hizo referencia por el considerando anterior (Confr. CPE 1841/2013/CA5, res. del 2/11/2018, Reg. Interno N° 951/18, de esta Sala “B”).

Asimismo, por el considerando 14º del pronunciamiento referido, se estableció que: *“...Aquella conclusión no obsta a que, atendiendo a las circunstancias fácticas verificadas en los hechos de autos, aquéllos pudieran encontrar adecuación típica en las disposiciones del art. 2, inc. "b" del Régimen Penal Tributario, toda vez que los montos evadidos presuntamente durante los ejercicios anuales 2010 y 2011 superarían, incluso, el monto mínimo de punibilidad establecido actualmente por aquel tipo penal conforme el texto vigente sancionado por la ley 27.430...”*.

3º) Que, el señor juez a cargo del juzgado de la instancia anterior convocó a M.L.C., a G.S.C. y a A.S.C. a prestar la declaración indagatoria de carácter ampliatorio y anotició a los nombrados sobre los hechos atribuidos consistentes en *“...las supuestas evasiones de pago, a los que se habría encontrado obligada la contribuyente CENTRO DE NUTRICION Y ESTETICA S.A. de: a) \$ 2.696.741,25 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio anual 2010 (períodos fiscales mensuales 9/2009 a 8/2010); b) \$ 2.547.476,20 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio anual 2011 (períodos fiscales mensuales 9/2010 a 8/2011); y c) \$ 1.945.579,51 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio anual 2012 (períodos fiscales mensuales 9/2011 a 8/2012)...”*, como así también que tales hechos habrían sido llevados a cabo *“... mediante: i) la presentación de la declaración jurada supuestamente engañosa del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal mensual septiembre/2009, en la cual se habría declarado débito fiscal en defecto y crédito fiscal en exceso; ii) la omisión presuntamente maliciosa de presentar las*



declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y a los períodos fiscales mensuales octubre/2009 a agosto/2012, al momento del vencimiento de las respectivas obligaciones (las presentaciones posteriores de las DDJJ correspondientes a los períodos fiscales 10/2009 a 5/2010 habrían sido efectuadas de modo engañoso por haber declarado créditos fiscales en exceso y débitos fiscales en defecto); y iii) la intervención de una persona interpuesta (O.S.V.) para ocultar la identidad de los verdaderos sujetos obligados (A.S.C., G.S.C. y M.L.C.) en sus calidades de responsables por la deuda de CENTRO DE NUTRICION Y ESTETICA S.A...”.

4º) Que, mediante el pronunciamiento que luce agregado en copias a fs. 13/26 vta. del presente, entre otras cosas, el señor juez a cargo del juzgado de la instancia anterior dispuso: “...**I.- REFORMULAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA** dictado a fs. 1864/1889 respecto de A.S.C..., G.S.C...y M.L.C..., por considerar a todos los nombrados ‘prima facie’ coautores penalmente responsables...de los delitos de evasión tributaria agravada y simple (art. 2º inciso “b” de la ley N° 24.769 -texto según ley 26.735- y art. 1 del Régimen penal Tributario introducido por el art. 279 de la ley N° 27.430), en orden a los hechos descriptos por la consideración 5º de la presente...”.

Corresponde señalar que por el considerando 5º de la resolución referida se reprodujo la imputación transcrita por el considerando 3º de la presente.

5º) Que, en consecuencia, con relación al recurso de apelación interpuesto por la defensa de M.L.C., de G.S.C. y de A.S.C., contra lo dispuesto a su respecto por el punto I de la resolución obrante a fs. 13/26 vta. del presente legajo, se advierte que por aquél se formulan agravios contra la resolución del juzgado de la instancia anterior que dispuso, según lo que se expresara por aquel tribunal, “...**REFORMULAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO...**” decretado respecto de los nombrados, con relación a los mismos hechos por los cuales aquéllos ya fueron procesados, en razón de haber sido presuntamente acreditada, de manera sobreviniente, la concurrencia de la circunstancia descripta por el tipo agravado prevista en el art 2, inc. b), de la ley 24.769 -texto según ley 26.735- con relación a los hechos que importan la evasión supuesta del Impuesto al



Valor Agregado correspondiente a los ejercicios anuales 2010 y 2011.

6º) Que, de conformidad con lo establecido por este Tribunal por pronunciamientos anteriores, *“... cuando un hecho único puede ser calificado con más de una disposición penal, aquella unidad no desaparece con motivo de la posibilidad de este encuadramiento plural. Con una interpretación contraria a la expresada, la hipótesis del art. 54 del Código Penal siempre se transformaría en un supuesto de concurso de delitos, soslayándose que en este último caso se presupone la existencia de...varios hechos...”* (art. 55 del Código Penal; confr. Regs. Nos. 533/03,1217/04, 187/08 y CPE 1579/2013/12/CA5, res del 14/03/16, Reg. Interno N° 95/2016 -voto del Dr. Roberto Enrique HORNOS- entre otros de esta Sala “B”).

7º) Que, nuestro más Alto Tribunal ha establecido: *“...cualquiera fuese el encuadramiento legal que pudiera corresponder en definitiva al único acontecimiento por el cual el procesado resulta inculcado, la decisión del magistrado nacional en cuanto propicia en función de aquellas calificaciones un juzgamiento por separado importa la posibilidad de violar la prohibición de la doble persecución penal, cuyo rango constitucional ha sido reconocido por la Corte...”* (confr. Fallos 311:67).

8º) Que, por lo expresado, toda vez que el nuevo auto de procesamiento dispuesto respecto de M.L.C., de G.S.C. y de A.S.C. resultaba innecesario en atención a que se trata de los mismos hechos por los cuales los imputados ya fueron procesados (resolución que se encuentra firme), más allá de la significación jurídica que pueda otorgarse a aquellos hechos, el mismo no modifica en nada la situación jurídica que se verificaba en los autos principales antes de su dictado, ni puede ocasionar un perjuicio nuevo para los imputados, de modo que además de la intrascendencia jurídica de lo resuelto a su respecto por el por el punto dispositivo I de la resolución apelada, la misma resulta meramente declarativa y, por lo tanto, no puede dar lugar a un nuevo recurso de apelación con relación a hechos que ya fueron considerados por este tribunal.

Por ello, corresponde establecer que resultó innecesario e intrascendente el pronunciamiento efectuado con relación a M.L.C., a G.S.C. y a A.S.C. por el punto I de la resolución que luce agregada a fs. 13/26 vta. del

Fecha de firma: 02/11/2020

Alta en sistema: 03/11/2020

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO JAVIER GRANDOLI, PROSECRETARIO DE CAMARA



#34241928#272236795#20201102103309038

presente legajo y, por lo tanto, corresponde declarar mal concedidos los recursos que habilitan esta instancia con respecto a aquella cuestión.

9º) Que, en consecuencia, en lo que interesa a la presente, por los puntos I y III de la resolución apelada se dictó un auto de procesamiento, sin prisión preventiva, con relación a O.S.V. por considerar a la nombrada coautora penalmente responsable de los delitos de evasión tributaria simple y agravada referidos en el considerando 3º de la presente y se mandó trabar un embargo sobre los bienes de aquélla hasta cubrir la suma de veintinueve millones cuatrocientos mil pesos (\$ 29.400.000).

Para decidir de esta forma, el juzgado de la instancia previa consideró acreditada la intervención personal de O.S.V. en los hechos de evasión tributaria presunta por los que se le recibió la declaración indagatoria, en tanto ésta habría tenido un *“...rol activo...en las tareas cotidianas de la sociedad [que] se deriva de su intervención en diferentes sucesos vinculados a la administración de dicha firma...[y el] significativamente prolongado período a lo largo del cual V. habría ejercido el cargo de presidente (habría iniciado el mandato en noviembre de 2001 -confr. fs. 28/30vta.- y lo habría ostentado hasta su renuncia, efectuada en noviembre de 2012 -confr. fs. 32/34), [por el cual se verificaría]...una continuidad incompatible con la idea de su inactividad en las tareas concretas del ente como ser la vinculadas con las evasiones de pago del Impuesto al Valor Agregado, según la presente imputación, durante el transcurso de alrededor de tres años...”*.

Además, en lo que interesa a la presente, por el punto dispositivo IV de la resolución apelada se dispuso la prohibición de salida del país de M.L.C., de G.S.C., de A.S.C. y de O.S.V., y se impuso con relación a esta última la obligación de no ausentarse de su domicilio por un período de tiempo superior a las 24 horas sin previa autorización del juzgado *“a quo”*.

10º) Que, por el recurso de apelación que luce agregado en fotocopias a fs. 28/29 vta., la defensa de O.S.V. se agravió de la resolución recurrida sosteniendo que la decisión no resultaría una derivación razonada del derecho vigente y que no se ajusta a las constancias de la causa en tanto se atribuye responsabilidad penal a su defendida a partir de actos sociales llevados cabo por aquélla que no tienen relevancia respecto de la administración de la



empresa y/o la obligación de tributar. En consecuencia, sostuvo que, en tales condiciones, se habría atribuido responsabilidad a su defendida por su sola condición de presidente de la sociedad.

Agregó que, en lo que hace a la agravante aplicada a los hechos investigados, su defendida no podría haber “...ocultado a los C. en tanto supuestos sujetos obligados, pues el único sujeto obligado en estos ha sido la Sociedad CENTRO DE NUTRICIÓN Y ESTÉTICA S.A...”. Además, argumentó que, no obstante lo expresado por la resolución recurrida, no existirían elementos que acrediten el conocimiento y la voluntad de O.S.V. de realizar la totalidad de los elementos típicos del art. 2, inc. “b” de la ley 24.769.

Por otra parte, la defensa se agravió del rol de coautora que por la resolución apelada se atribuyó a O.S.V. en los hechos que se le imputaron.

Con relación al monto del embargo trabado sobre los bienes de la nombrada, expresó que no surgirían elementos que permitan avalar la suma del mismo, la cual resultaría a criterio de esa parte abultada e injustificada.

Finalmente, respecto de la prohibición de salida del país y de la obligación impuesta a su defendida de no ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin previa autorización del juzgado “a quo”, argumentó que tales medidas resultarían abusivas en atención a que aquélla ha cumplido con todos y cada uno de los actos procesales correspondientes y ha asistido cada vez que fue citada.

11º) Que, por su parte, por el recurso de apelación que luce agregado en fotocopias a fs. 30/30 vta., la defensa de M.L.C., de G.S.C. y de A.S.C. se agravió de lo resuelto por el punto dispositivo IV de la resolución apelada, en cuanto por aquél se dispuso la prohibición de salida del país de los nombrados, por entender que no existen elementos objetivos que justifiquen esta medida, en tanto sus defendidos siempre se han presentado y han dado cumplimiento a las medidas dictadas a su respecto.

12º) Que, atento a que por el recurso de apelación y por el memorial presentado por la defensa de O.S.V. en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N. no se invocaron agravios respecto de lo establecido por la resolución recurrida en cuanto a la materialidad de los hechos de evasión presunta en los cuales se atribuye a la nombrada haber intervenido



culpablemente, por la presente no se examinará aquel aspecto de la decisión apelada (art. 445 del C.P.P.N.).

13º) Que, con relación a los agravios introducidos por la defensa de O.S.V., corresponde establecer que, por las invocaciones efectuadas acerca de la insuficiencia supuesta de elementos de convicción reunidos para sustentar el pronunciamiento impugnado, no se controvierte la valoración probatoria efectuada por aquel pronunciamiento, mediante el cual se estableció, con el grado de certeza exigido para este momento del proceso, la participación culpable de la nombrada en los hechos ilícitos investigados.

14º) Que, en efecto, contrariamente a lo argumentado por la parte recurrente, los elementos de prueba incorporados a los autos principales constituyen un cuadro probatorio idóneo y suficiente para sustentar, con el alcance exigido por el art. 306 del C.P.P.N., la estimación provisoria efectuada por la resolución apelada acerca de la concurrencia, en el comportamiento que O.S.V., en principio, habría llevado a cabo, de los elementos objetivos y subjetivos correspondientes a los tipos penales por los cuales el juzgado “a quo” asignó significación jurídica al hecho investigado.

En este sentido, los elementos de prueba existentes en la causa conforman un cuadro probatorio idóneo y suficiente para establecer, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa de la investigación, la intervención en principio culpable de O.S.V. en los hechos presuntamente ilícitos aludidos por el considerando 1º de este pronunciamiento.

15º) Que, por otra parte, los cuestionamientos que la defensa de O.S.V. efectuó sobre la entidad convictiva de los elementos de prueba incorporados actualmente a la causa parten de un análisis aislado de cada uno de aquéllos. Sin embargo, como ha establecido este Tribunal en casos anteriores, *“...aquel análisis parcial no puede tener una recepción favorable, pues la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada elemento de prueba depende de la valoración conjunta que se efectúa de aquéllos teniendo en cuenta la diversidad, la correlación y la concordancia de los mismos, pero no de un tratamiento particular y aislado pues, por su misma naturaleza, cada uno de los indicios no puede llegar a fundar aisladamente ningún juicio*

convictivo, el cual deriva de la pluralidad y de la concordancia de éstos (confr. Fallos 300:928)...” (confr. Regs. Nos. 43/11, 490/11 y 718/12, como también CPE 387/2010/2/CA1, res. del 24/10/14, Reg. Interno N° 464/14; CPE 1538/2010/4/CA1, res. del 10/03/15, Reg. Interno N° 58/15; CPE 12005804/2009/2/CA1, res. del 17/07/15, Reg. Interno N° 310/15, CPE 1274/2013/6/3/CA3, res. del 18/09/15, Reg. Interno N° 419/15 y CPE 354/2014/2/CA1, res. del 01/07/16, Reg. Interno N° 312/16, todos de esta Sala “B”).

Como ha establecido esta Sala “B”, “...la totalidad de los elementos probatorios arrimados al expediente debe ser objeto de una valoración articulada, contextual y conjunta dentro del plexo probatorio, el cual, evaluado en un acto único y con ajuste a la sana crítica racional, posibilita la obtención de una acabada constatación de los hechos investigados. El mero análisis parcializado de los elementos de prueba incorporados al proceso impide la comprensión global del hecho de que se trata.” (confr. Regs. Nos. 879/03, 785/10, 360/13 y CPE 278/2013/4/CA2, res. del 31/10/2016, Reg. Interno N° 624/16 de esta Sala “B”).

16°) Que, la circunstancia alegada por la defensa de O.S.V. en cuanto a que la nombrada ocupaba sólo de manera formal el cargo de presidente de CENTRO DE NUTRICIÓN Y ESTÉTICA S.A., que carecía de manejo administrativo del mismo y que, por ende, ignoraba las obligaciones tributarias que le correspondían no puede tener acogida favorable.

En efecto, para establecer si una persona puede tener responsabilidad penal a título de autor, de partícipe o de instigador de un hecho, corresponde en primer lugar determinar si tomó parte en la ejecución del mismo, si le prestó al autor un auxilio o cooperación sin los cuales aquél no habría podido cometerse, si determinó directamente a otro a cometer el hecho, si cooperó de cualquier otro modo a su ejecución o si le prestó una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, de acuerdo a lo que disponen los arts. 45 y 46 del C.P.

17°) Que, en este sentido, las circunstancias reseñadas y valoradas por el juzgado “a quo” por los considerandos 18° a 20° de la resolución recurrida resultan, en principio, suficientes para estimar probado, con el grado



de probabilidad propio de esta etapa del proceso, que O.S.V. habría participado culpablemente, junto con M.L.C., con G.S.C., y con A.S.C., en la comisión presunta de los hechos por los cuales se le recibió la declaración indagatoria.

18°) Que, en efecto, surge de las constancias de la causa y no se encuentra controvertido por la defensa de la imputada, que O.S.V. fue designada como presidente del directorio de CENTRO DE NUTRICIÓN Y ESTÉTICA S.A. y, en tal carácter, habría tenido a su cargo la representación de la sociedad mencionada durante los años correspondientes a los períodos fiscales en los cuales se habrían concretado las evasiones tributarias presuntas que se investigan en el expediente principal.

Además, se encuentra acreditado que aquélla habría sido propietaria de la mitad del capital social de CENTRO DE NUTRICIÓN Y ESTÉTICA S.A. desde la constitución de la persona jurídica, ocurrida el 16 de noviembre de 2001, circunstancia que permitiría, en principio, presumir la concurrencia de un interés particular sobre la gestión del negocio (confr. la copia del contrato constitutivo obrante a fs. 28/30 vta. del principal).

Por otra parte, contrariamente a lo manifestado por la defensa, las constancias incorporadas al expediente permiten estimar razonable la conclusión del juzgado de la instancia anterior en cuanto a que la participación de la nombrada en la sociedad no habría sido una mera formalidad.

En efecto, además del cargo que ocupaba la nombrada en la sociedad y de su participación accionaria, se encuentra acreditado, también, que en aquel carácter O.S.V. habría suscripto la solicitud de inscripción de la persona jurídica ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (confr. fs. 116/116 vta. del principal) y habría otorgado poderes para la representación de la sociedad (confr. fs. 206/209 del cuerpo “Actuaciones Ganancias II” que obra reservado por Secretaría).

Por otro lado, debe repararse en la circunstancia de que a fs. 37 de las actuaciones principales luce una fotocopia remitida por la Inspección General de Justicia, junto con el contrato social de CENTRO DE NUTRICIÓN Y ESTÉTICA S.A., que refleja la celebración de una asamblea de accionistas (sin consignar firmas aquella acta), en la cual habría participado O.S.V., y por la cual se habrían aprobado los estados contables correspondientes al ejercicio contable cerrado el 31/8/2010 (que se corresponde con el período fiscal 2010 del



Impuesto a las Ganancias, y con los períodos fiscales 9/2009 a 8/2010 del Impuesto al Valor Agregado, cuya presunta evasión de pago se investiga por el sumario principal).

Finalmente, cabe advertir también que, en virtud del requerimiento de fecha 18 de marzo de 2013 (nota N° 126/2013) cursado a O.S.V., en el carácter de presidente de CENTRO DE NUTRICIÓN Y ESTÉTICA S.A. (al domicilio registrado por aquélla, sito en Franco 2442 C.A.B.A.), se presentó ante la A.F.I.P.-D.G.I. la señora E.L., invocando la representación de aquella persona jurídica mediante una copia del poder otorgado por V., solicitando una prórroga para acompañar la documentación de la sociedad requerida por la fiscalización (confr. fs. 194/196 y 205/210 del cuerpo “Actuaciones Ganancias II” que obra reservado por Secretaría).

19º) Que, las circunstancias reseñadas en la consideración que antecede, permitirían concluir razonablemente que O.S.V. habría tenido la intervención que le atribuye el juez de la instancia anterior por la resolución apelada “...en las cuestiones contables y fiscales de la sociedad...” y, por lo tanto, estimar acreditada *prima facie* la participación culpable de la nombrada en la comisión presunta de los hechos con el alcance requerido para esta etapa del proceso.

20º) Que, por lo demás, con relación a la calificación legal atribuida a la participación del imputada o a aquélla aplicable a los hechos traídos a conocimiento de esta Sala, como se expresó por el considerando 5º a 8º de la presente, por numerosos pronunciamientos anteriores de este Tribunal se ha establecido que en los casos en los cuales la calificación legal establecida en un auto de procesamiento no tiene una incidencia concreta en la situación de los imputados en la causa, como por ejemplo el atinente al régimen de la libertad provisoria, el recurso de apelación interpuesto con relación a aquella cuestión es inadmisibile porque no ocasiona agravio alguno a los imputados, pues la calificación recaída en este tipo de pronunciamientos no causa estado, no es vinculante para el juez de la instancia anterior en el futuro, ni para las instancias superiores, ni para el Ministerio Público Fiscal, ni para el tribunal de juicio (confr. Regs. N° 426/00, 117/05, 243/06, 182/07, 09/13 y CPE 81004859/2009/5/CA3, res. del 3/5/17, Reg. Interno N° 262/17, entre otros, de

Fecha de firma: 02/11/2020

Alta en sistema: 03/11/2020

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO JAVIER GRANDOLI, PROSECRETARIO DE CAMARA



#34241928#272236795#20201102103309038

esta Sala “B”).

21º) Que, por lo tanto, ni por los agravios deducidos por la defensa de O.S.V. en oportunidad de la apelación, ni por las alegaciones de aquélla, efectuadas en oportunidad de informar en los términos del art. 454 del C.P.P.N., se controvierte la valoración probatoria efectuada mediante el pronunciamiento recurrido, por el cual se estableció un grado de certeza suficiente -para este momento del proceso-, con respecto a la participación culpable de la nombrada en los hechos “*prima facie*” ilícitos que se atribuyeron a aquélla.

22º) Que, por lo expresado en las consideraciones que anteceden, corresponde concluir que el auto de procesamiento dictado respecto de O.S.V. resulta ajustado a derecho y a las constancias incorporadas actualmente al expediente.

23º) Que, por lo demás, sin perjuicio de la necesidad eventual de producir alguna prueba, y por los resultados que aquélla pudiera traer aparejada en el futuro, no pueden soslayarse las conclusiones expresadas por los considerandos anteriores -que se basan en las constancias que actualmente se encuentran incorporadas a la encuesta-, ni se impide adoptar el temperamento que se establece por el art. 306 del ordenamiento adjetivo, pues por aquel ordenamiento se prevé el carácter provisorio, revocable y reformable del auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.), precisamente para que el juez pueda ponderar aquellas circunstancias futuras en el supuesto en que se produjesen (confr. Regs. Nos. 1036/05, 132/08, 7/11, 379/11, 703/11, 762/11, 161/12, CPE 413/2012/2/CA1, res. del 12/06/15, Reg. Interno N° 237/15 y CPE 827/2014/3/CA1, res. del 29/4/16, Reg. Interno N° 167/16, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

En este sentido, este Tribunal ha establecido: “...*para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados por aquel hecho...*” (confr. Regs. Nos. 606/10 y CPE 413/2012/2/CA1, res. del 12/06/15, Reg. Interno N° 237/15, entre muchos otros, de esta Sala “B”).



24º) Que, con relación al agravio de la defensa de O.S.V. en orden al monto del embargo dispuesto por el tribunal “*a quo*” sobre los bienes de la nombrada, no se advierten los motivos de la improcedencia concreta del monto fijado en aquella medida cautelar en procura de garantizar las eventuales y diversas obligaciones que se imponen por el art. 518 del C.P.P.N.

En este sentido, corresponde establecer que no se exige al juzgado “*a quo*” el cálculo exacto de la suma que eventualmente correspondería ingresar en concepto de tributos, intereses o multas, sino que basta efectuar una evaluación aproximada de aquella suma.

25º) Que, con respecto a la apelación articulada por la defensa de O.S.V. y por la defensa de M.L.C., de G.S.C. y de A.S.C. contra lo dispuesto por el punto dispositivo IV de la resolución que luce agregada a fs. 13/26 vta., en cuanto por aquél se dispuso la prohibición de salida del país respecto de los nombrados, tal medida no constituye una prohibición absoluta de salida del país, sino que por aquélla se pretende que los imputados deban requerir autorizaciones concretas al juzgado “*a quo*” para ausentarse del territorio nacional. Esto se vincula con el cumplimiento de los fines del proceso, en tanto tiende a garantizar la comparecencia de los imputados a los llamados del juez de la causa (confr. Reg. N° 415/2009, de esta Sala “B”).

En el mismo sentido, con respecto al agravio de la defensa de O.S.V. relacionado con la imposición por parte del juzgado “*a quo*” a la imputada de la obligación de no ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización del juzgado, la medida en cuestión resulta ajustada a derecho en atención a lo que se establece por el art. 310 del C.P.P.N. y en caso de presentarse alguna necesidad puntual para el cumplimiento de aquella medida, aquélla podrá plantear la situación ante el juzgado “*a quo*” y petitionar en consecuencia.

En consecuencia, las medidas dispuestas por el señor juez “*a quo*” por el punto IV de la parte dispositiva de la resolución apelada fueron dispuestas de manera acorde con las finalidades de la etapa instructoria y conforme a derecho.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Fecha de firma: 02/11/2020

Alta en sistema: 03/11/2020

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO JAVIER GRANDOLI, PROSECRETARIO DE CAMARA



#34241928#272236795#20201102103309038

I. DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la defensa de M.L.C., de G.S.C. y de A. S. C. contra lo dispuesto con relación a los nombrados por el punto dispositivo I de la resolución apelada.

II. CONFIRMAR la resolución recurrida en cuanto por aquélla se dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de O.S.V. y se dispuso trabar embargo sobre los bienes de nombrada (puntos dispositivos I y III).

III. CONFIRMAR lo resuelto por el punto IV de la resolución apelada en cuanto fue materia de recurso.

IV. CON COSTAS a la defensa de O.S.V. en virtud de lo resuelto por el punto dispositivo **II y III** de la presente, y a la defensa de M.L.C., de G.S.C. y de A.S.C. en virtud de lo resuelto por el punto dispositivo **III** de la presente (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía restante de esta Sala.